



***Apuntes sobre el Reconocimiento
de Estados y de Gobiernos***
Luis L. Córdova Arellano
www.cordovaluis.org
2008

APUNTES SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE ESTADOS Y DE GOBIERNOS

Luis Córdova Arellano

www.cordovaluis.org

cordovaluis@gmail.com

Cuando hablamos del surgimiento de nuevos Estados, tenemos que referirnos a la “sucesión de Estados”, así como al reconocimiento de Estados y de Gobiernos.

Respecto de la sucesión de Estados, existen dos convenciones, que no han entrado en vigor. Nos referimos a las siguientes Convenciones:

- a.- Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados;
- b.- Convenio de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado.

[Pueden consultarse en: <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/355/5.pdf>

También en: <http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/20.html> y
<http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/21.html>]

Por otra parte, existen dos teorías para explicar el surgimiento de los Estados:

a.- Teoría Declarativa (la de mayor fuerza): Un Estado surge cuando reúne todos los elementos para ser considerado un Estado (básicamente, territorio, población y gobierno).

b.- Teoría Constitutiva (también llamada “histórica”): Un Estado surge a la vida cuando es reconocido por los otros Estados.

La crítica que se hace a esta teoría es la siguiente: “*se puede prestar a condicionamiento por los países más fuertes, política y económicamente hablando. Aunque en la práctica, como lo vamos a ver, esta teoría se impone.*” (Manuel Becerra, *Panorama...*, p. 14).

Cabe señalar que la Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 82.- NO RECONOCIMIENTO DE ESTADOS O DE GOBIERNOS O AUSENCIA DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS O CONSULARES

1. Los derechos y las obligaciones del Estado huésped y del Estado que envía en virtud de la presente Convención no serán afectados ni por el no reconocimiento

por uno de esos Estados del otro Estado o de su gobierno ni por la inexistencia o la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre ellos.

2. El establecimiento o el mantenimiento de una misión, el envío o presencia de una delegación o de una delegación de observación o cualquier acto de aplicación de la presente Convención no entrañarán por sí mismos el reconocimiento por el Estado que envía del Estado huésped o de su gobierno ni por el Estado huésped del Estado que envía o de su gobierno.

Esta Convención no ha sido ratificada por México.

Dicha Convención hace “referencia a las misiones permanentes y a las delegaciones ante conferencias.” [Fuente: <http://www.sre.gob.mx/Acervo/resenaspublicaciones.htm>].

El artículo 82 antes citado parece inspirarse en la llamada Doctrina Estrada, misma que se refiere al **reconocimiento de gobiernos**.

Sobre ésta, Manuel Becerra expresa:

México ha conformado una doctrina concreta denominada doctrina Estrada, la cual surge como una reacción ante la práctica denigrante de condicionar el reconocimiento de los nuevos gobiernos, que trae por consecuencia una intromisión en los asuntos internos de los estados. También es producto de la experiencia amarga que ha sufrido México de intervenciones armadas, condicionamiento de su gobierno surgido de la revolución por parte de las grandes potencias continentales y extracontinentales.

Se le ha denominado doctrina Estrada a un comunicado hecho el 27 de septiembre de 1930, por el eminente diplomático mexicano Genaro Estrada, que en ese tiempo se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores de México.

Fuente: Becerra Ramírez, Manuel, *Panorama del derecho mexicano. Derecho internacional público*; 1997. <http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1911/5.pdf> [Las palabras del sinaloense Genaro Estrada pueden consultarse en esta misma obra].

Manuel Becerra extrae sus elementos esenciales:

- a) México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos.*
- b) México considera que el reconocimiento es una práctica denigrante que, además de herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos.*
- c) El gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus gentes diplomáticos y a confirmar aceptando, cuando también lo crea procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin*

calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades.

<http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1911/5.pdf>

La valoración de Manuel Becerra sobre la Doctrina Estrada es la siguiente:

Estos tres puntos esenciales de la doctrina Estrada giran alrededor del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, y por supuesto ha tenido un papel muy importante en tanto que ha servido como freno de la intervención estadounidense en los países del continente. Freno que en muchos casos ha sido rebasado, pero en esta hipótesis se comporta claramente en violación de la normatividad internacional.

La práctica mexicana de la doctrina Estrada no ha sido del todo armónica, ya que es posible ver ciertas incongruencias. Como ya observaba Sepúlveda, México no reconoció al gobierno de facto encabezado por Francisco Franco, y reconoció al gobierno de la República en el exilio en agosto de 1945, y otros casos similares ocurrieron en Sudamérica en la década de los cuarenta. Lo mismo sucedió en 1989, en el caso de Panamá (en el conflicto entre los gobiernos de Estados Unidos y Panamá que desencadenó la invasión), cuando el gobierno mexicano hizo calificaciones de orden interno que sólo le correspondía hacer a los panameños.

En términos generales, la doctrina Estrada es una aportación de gran valor a la política exterior del continente americano, ya que está conectada estrechamente con principios de derecho que tienen validez universal. Resta al gobierno mexicano ser congruente con ella en todo momento.

El recientemente fallecido embajador mexicano (22-oct-2008, La Habana), Gustavo Iruegas, sobre la Doctrina Estrada, expresa lo siguiente:

La Doctrina Estrada es una política que asumió México en 1930, cuando se habían dado muchos golpes de Estado y cada vez que un Gobierno --en un país latinoamericano-- cambiaba de Gobierno, tenía que crearse el apoyo necesario entre otros países --principalmente en las grandes potencias-- para que lo reconocieran.

México --en una decisión que sirvió mucho para, de ahí en adelante, plantear una manera diferente el tratar este tema-- explicó que México no iba a reconocer ni a desconocer Gobiernos. Que se iba a limitar a continuar o no la relación diplomática con esos países. Pero que nunca diría: lo reconozco o lo desconozco.

En esta circunstancia, cuando se aplica ahora, lo que dijo el Presidente es que aplicará la Doctrina Estrada y que continuará la relación.

Fuente: Entrevista que ofrecieron Jorge G. Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores y Gustavo Iruegas, Subsecretario para América Latina y el Caribe, Viernes, 12 de Abril de 2002, San José, Costa Rica, 12 de abril de 2002.
<http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=2880> [Consulta: octubre de 2008].

Se recomienda el siguiente artículo: MURIO GUSTAVO IRUEGAS,
<http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=politica&article=012n1pol>)

Esta entrevista ofrecida por Gustavo Iruegas ocurre un día después del fallido Golpe de Estado en Venezuela.

*

Cabe señalar que la Comisión de Derecho Internacional (Reporte de 2003) ha expresado que podría verse como un ejemplo de “**Acto Unilateral**” (fuente de Derecho Internacional), el reconocimiento de Estados).

[Fuente: <http://untreaty.un.org/ilc/reports/2003/spanish/chp7.pdf>, párrafo 246].

Al respecto, la Comisión, expresa:

El acto unilateral en general y el acto de reconocimiento en particular debían ser formulados por personas habilitadas para actuar en el plano internacional y obligaba al Estado al que éstas representaban. Además, el acto debía ser expresado libremente, lo cual imponía determinadas condiciones de validez.

[Fuente: <http://untreaty.un.org/ilc/reports/2003/spanish/chp7.pdf>, párrafo 252].

En este sentido, podría argumentarse el principio: *Acta Sunt Servanda*, inspirado en aquel principio del derecho de los tratados (*Pacta Sunt Servanda*). Es decir, una vez declarado el Acto Unilateral, podría ser oponible, lo cual implica que la modificación, suspensión o revocación, ya no es facultad del autor del mismo.

La Comisión expresó sus dudas respecto a si el reconocimiento de Estados y de Gobiernos era realmente un Acto Unilateral o simplemente un acto discrecional de los Estados. (Párrafo 288).

En su reporte de 2004, la Comisión expresa:

201. El informe [ILC, 1996] trataba de varios casos de reconocimiento de Estados, debido a la abundancia de la práctica, sobre todo en relación con los “nuevos” Estados de Europa oriental (Estados de la ex Yugoslavia, por ejemplo). Se mencionaba también el reconocimiento condicional, así como casos de reconocimiento resultante de la participación en calidad de miembro de una organización internacional.*

202. En cambio, los casos de reconocimiento de gobiernos eran menos frecuentes y menos precisos. El mantenimiento o no de las relaciones diplomáticas o la retirada de embajadores constituían indicios en la práctica del reconocimiento.

* http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/A_51_10.pdf

*

Ahora bien, respecto a la llamada “**sucesión de Estados**”, Manuel Becerra analiza la desintegración de la Unión Soviética y de Yugoslavia, en relación a la posición que los Estados Unidos y Europa adoptaron al respecto. Veamos:

Los acontecimientos dramáticos que llevaron a la desaparición tanto del bloque socialista como de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pusieron nuevamente a prueba las normas internacionales de reconocimiento y de sucesión de estados.

La idea prevaleciente en la doctrina de derecho internacional de que el reconocimiento, en términos generales y sobre todo el de estados, más que una materia del derecho es un problema de la política internacional que está probada con la reciente práctica en el caso de desaparición de la Unión Soviética y Yugoslavia. En estos casos sobresale la postura de Estados Unidos y de la Comunidad Europea quienes incluso establecen ciertas normas mínimas para expresar su reconocimiento.

En efecto, a fin de hacer frente a los cuestionamientos sobre la desintegración de la URSS y Yugoslavia, la Comunidad Europea estableció las siguientes reglas concretas o requisitos para obtener el reconocimiento:

- a) Respeto por las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas y los compromisos contenidos en el acta final de Helsinki y en la Carta de París, especialmente en relación con el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos;*
- b) Garantías para los derechos de las etnias, grupos nacionales y minorías...;*
- c) Respeto por la inviolabilidad de todas las fronteras las cuales sólo pueden ser cambiadas por medios pacíficos y de común acuerdo;*
- d) Aceptación de todos los compromisos relevantes en relación con el desarme y la no proliferación nuclear así como con la seguridad y estabilidad regional;*
- e) La obligación de resolver las controversias por medio de acuerdo, incluyendo, cuando sea apropiado por el recurso al arbitraje, todas las cuestiones relativas a la sucesión de estados y las disputas regionales.*

Las reglas concluyen con la prevención de que los Estados europeos "no reconocerán entidades que son el resultado de la agresión" y que "ellos tomarían en cuenta los efectos del reconocimiento en los estados vecinos.

Para el caso de Yugoslavia, a fin de hacer frente al problema de reconocimiento que siguió a la desintegración de la República Socialista Federal de Yugoslavia, la declaración introdujo más requisitos:

- a) Aceptar las provisiones del proyecto de convención bajo consideración de la Conferencia sobre Yugoslavia, especialmente aquellas relativas al capítulo II sobre derechos humanos y derechos de grupos étnicos o nacionales;*

b) *Apoyar los esfuerzos de la Secretaría General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la continuación de la Conferencia sobre Yugoslavia.*

La desintegración de la Unión Soviética

Como resultado de la desintegración de la URSS, 15 estados emergieron y en lo que se refiere a su reconocimiento, tuvieron un tratamiento diferenciado.

Primero tenemos el caso de los tres estados del Báltico: Letonia, Lituania y Estonia, que es singular por sus antecedentes históricos. Estos tres gobiernos fueron reconocidos como estados independientes a principios de la década de los veinte (por ejemplo, mediante el tratado celebrado entre Lituania y Rusia en el año de 1920 se reconoce la soberanía plena de Rusia sobre Latvia). Otro aspecto importante en la historia es el tratado firmado entre la URSS y Alemania denominado Pacto Molotov Ribbentrop de 1939 que contenía un acuerdo secreto (los datos y el mismo acuerdo secreto se dio a la publicidad durante la política de transparencia informativa —la glasnost— impulsada por el entonces líder soviético Mijail Gorbachov) que planeaba la anexión a la URSS de los tres estados del Báltico, como en efecto sucedió en 1940 cuando gobiernos títeres en el poder de los tres estados pidieron y lograron la anexión de sus estados a la URSS. La reacción de la mayoría de los estados occidentales fue que de jure reconocían a los tres estados del Báltico y aceptaban un control de facto por parte de la Unión Soviética, por lo que en consecuencia no mantenían relaciones diplomáticas con ellos.

En 1991, después del abortado golpe de Estado en contra del gobierno de Gorbachov, Lituania insistió sobre su independencia. En poco tiempo, las tres ex repúblicas del Báltico fueron reconocidas por la comunidad internacional.

Lo interesante del caso es que tanto los miembros de la Comunidad Europea como Estados Unidos y otros países no usaron el término de "reconocimiento". Por ejemplo, los europeos en su comunicado del 27 de agosto de 1991 se referían a "la restauración de la soberanía e independencia de los estados del Báltico que habían perdido en 1940" y confirmaban la decisión de reestablecer relaciones diplomáticas inmediatamente.

Otro caso es el de las tres repúblicas eslavas, Ucrania, Belorrusia (actualmente se denomina Belarús) y Rusia. Desde julio de 1990 Belorrusia y Ucrania habían declarado su soberanía pero no hubo una reacción internacional. Después del fallido golpe de Estado en Moscú, el 24 de agosto de 1991, Ucrania y Belorrusia declararon su independencia. La declaración de Ucrania la hizo sujeta al referéndum realizado el primero de diciembre de 1991, el cual dio por resultado una votación en favor de la independencia de 90 por ciento de la población.

En virtud de que el ex presidente soviético Mijail Gorbachov todavía hacía maniobras para salvar del naufragio a la URSS, sólo algunos países se apresuraron a reconocer la independencia de Ucrania, entre ellos Canadá, Polonia, Hungría y Rusia, entonces todavía República de la URSS.

Es interesante notar que Canadá tomó esa decisión en virtud de la gran población de ucranianos que tiene en su territorio y lo hizo con base en los resultados del referéndum. Ahora Canadá enfrenta el mismo problema, pero ahora con una de sus provincias, Quebec.

Dos reuniones sellaron la suerte de la Unión Soviética, la primera celebrada el 8 de diciembre en Minsk en donde las tres repúblicas eslavas, Rusia, Ucrania y Belorrusia declararon que "la URSS dejaba de existir, como sujeto de derecho internacional y como una realidad geopolítica"; y la reunión de Alma-Ata, Kazajistán, del 21 de diciembre en donde se dieron cita once ex repúblicas soviéticas: Ucrania, Belorrusia, Rusia, Kazajistán, Kirghizistán, Tadjikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaijón y Moldavia, las cuales formalmente establecieron la Comunidad de Estados Independientes y la terminación de la URSS."

Habiendo establecido sus reglas, la Comunidad Europea pudo reaccionar rápidamente a este acontecimiento; el 23 de diciembre emitió una declaración sobre el "Futuro Estatus de Rusia y de las Otras Repúblicas Soviéticas" en la cual se reconoció a Rusia como continuadora de la personalidad jurídica internacional de la URSS. Aquí no se utilizó el concepto de reconocimiento. Más tarde, gradualmente, hasta que todas cumplieron los requisitos anotados, se reconoció a las otras ex repúblicas soviéticas.

Otra prueba del carácter político del reconocimiento es la postura de Estados Unidos, cuyo presidente en aquel tiempo, George Bush, en un mensaje por televisión saludó el nacimiento de los nuevos estados con motivo de la desintegración de la URSS e hizo una diferencia de reconocimiento, dividiendo a los nuevos estados en tres categorías. En la primera, reconoció a Rusia y anunció su apoyo para que ocupara un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; en la segunda, reconoció la independencia de Ucrania, Armenia, Kazajistán, Belorrusia y Kirghizistán y en virtud de que estas ex repúblicas manifestaron bilateralmente compromisos hacia EUA, se acordó establecer relaciones diplomáticas con ellas y apoyarlas para ser miembros de las Naciones Unidas a aquellas que no lo fueran. En la tercera categoría se refirió a seis ex repúblicas, Moldavia (actualmente se le reconoce como Moldava), Turkmenistán, Azerbaijón, Tadjikistán, Georgia y Uzbequistán, a las cuales se les condicionó el reconocimiento para "cuando tengamos la satisfacción de que ellas han hecho los mismos compromisos respecto de políticas responsables de seguridad y de principios democráticos, como lo han hecho los demás estados que hemos reconocido actualmente" (discurso, transmitido por TV, del presidente Bush el 25 de diciembre de 1991).

Es de notar que en los recientes casos de reconocimiento a que nos hemos referido, la institución del referéndum ha jugado un papel importante, como una manera de medir la autodeterminación de los pueblos, principio base de la soberanía.

Por lo que toca a la membresía de los organismos internacionales, también el caso de Rusia muestra ciertas consideraciones de carácter político no jurídico. En efecto, el 24 de diciembre de 1991 el representante permanente de la URSS en la Organización de Naciones Unidas entregó al secretario general una carta de Boris Yeltsin en la que manifestaba que "la Federación Rusa ocupará el lugar de la URSS como miembro de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad y todos los demás órganos y organizaciones del sistema de Naciones Unidas, con el apoyo de los estados de la Comunidad de estados Independientes" y más adelante afirmaba que la Federación Rusa "asume la plena responsabilidad de todos los derechos y obligaciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, incluidas las obligaciones financieras". Más tarde, el mismo secretario general hizo circular la carta entre las misiones permanentes acreditadas ante las Naciones Unidas.

Lo interesante del asunto es que no hubo ninguna reacción negativa sobre esta carta. De esa manera hubo una aceptación tácita de que Rusia fuera la continuadora de la URSS en la membresía, con todos los derechos en la ONU, por lo que Rusia, Ucrania y Belorrusia no necesitaron solicitar su admisión a las Naciones Unidas (estas dos últimas porque ya eran originarias de la ONU) siguiendo el procedimiento del artículo 4 de su estatuto, como sí lo tuvieron que hacer las demás ex repúblicas soviéticas.

*

El tema de la sucesión de Estados está regulado por el derecho consuetudinario. Algunas de sus reglas se han “codificado” en las Convenciones citadas arriba. Nos referimos a la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados y al Convenio de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado.

En la práctica, los problemas derivados de la sucesión de Estados se han resuelto por medio de la negociación a través de tratados de carácter bilateral o multilateral (Unión Soviética y Alemania, por ejemplo).

¿Qué ocurre con los tratados en vigor?

1.- “En este caso, el Estado predecesor permanece como parte de los acuerdos que se le aplicarán, de ahí en adelante, dentro de los nuevos límites espaciales; lógicamente no seguirá siendo miembro del tratado que se refiera al territorio del cual el Estado predecesor perdió su control.”

2.- “En cuanto al Estado sucesor, en el caso de que hubiera existido antes de la mutación, aplicará dentro de sus nuevos límites territoriales los tratados de los cuales formaba parte. Es decir, ésta es una regla que se refiere a la simple variación de los límites espaciales.”

3.- Libertad del Sucesor: “Esto significa que en regla general, el sucesor no es parte de los tratados en cuya elaboración no ha participado, es decir se aplica las reglas de “tabla rasa”. Sin embargo, este criterio se atempera en relación con los tratados multilaterales, ya que si bien el Estado sucesor no ha sido parte de estos tratados, tiene una vocación para suceder al Estado predecesor y a emprender, por su propia cuenta, la participación al régimen convencional. Es decir, a los principios de intransferibilidad y de variación espacial del orden jurídico se agrega el principio de aceptación selectiva por el Estado sucesor, del orden jurídico convencional establecido por el predecesor.”

4.- Excepción a la Libertad del Sucesor: Se refiere a “los tratados cuyo objeto sea establecer un régimen territorial específico (tratados sobre fronteras, sobre servidumbre, la creación de un estatus de neutralidad, etcétera) los cuales no serán afectados por la

sucesión de estados. Aquí se aplica la doctrina de *uti possidetis* que se refiere al respeto de las fronteras, incluyendo los tratados sobre fronteras.”

5.- “En lo que se refiere a los efectos de la sucesión de estados en el derecho interno, las reglas consuetudinarias son un tanto imprecisas ya que las materias a las que se aplican son muy variadas: bienes, obligaciones contractuales, derecho de las personas, etcétera. Normalmente, el Estado sucesor no está obligado por las normas que fueron creadas por una soberanía que no es la suya; sin embargo, por razones prácticas, y en interés de la población se mantienen temporalmente todas o parte de las normas creadas por el Estado predecesor.”

6.- “En relación con los bienes públicos, se aplica, en términos generales, la regla de que la sucesión trae por consecuencia la "extinción de los derechos del Estado predecesor y el nacimiento de los del Estado sucesor". En la práctica se aplica este principio, o bien, se reparten los bienes a prorrata entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.”

7.- “En el caso de las deudas, si son deudas generales contraídas dentro del interés del país, se transmiten a prorrata de acuerdo con la capacidad contributiva del territorio transferido y en el caso de las deudas locales contraídas en interés del territorio del sucesor se transmite en forma total a éste.”

8.- “Existe también el principio de las "deudas odiosas", que son las contraídas por las colonias en perjuicio de sus colonias; en este caso, el Estado sucesor se niega a hacerse cargo de las deudas contraídas.”

9.- “En relación con los compromisos efectuados por el Estado predecesor sobre la explotación de los recursos naturales (por ejemplo, concesiones de explotación), se aplica el principio de la soberanía permanente sobre los recursos naturales que es un argumento fuerte de los estados sucesores, y más cuando su aparición tiene como causa la descolonización.”

10.- “En lo que toca a la nacionalidad, normalmente ésta es afectada ya que se toma la del sucesor; sin embargo, en ocasiones se mantiene la nacionalidad del predecesor seguido de un derecho de opción a los ciudadanos. En algunos casos se reconoce una doble nacionalidad como en el caso de Rusia.”

[Fuente: Manuel Becerra].

APÉNDICE

“Se le ha denominado doctrina Estrada a un comunicado hecho el 27 de septiembre de 1930, por el eminente diplomático mexicano Genaro Estrada, que en ese tiempo se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores de México:

Con motivo de los cambios de régimen ocurridos en algunos países de la América del Sur, el gobierno de México ha tenido necesidad, una vez más, de decir la aplicación, por su parte, de la teoría llamada de "reconocimiento" de gobiernos.

Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido como pocos países, hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina que deja al arbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con ese motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades, parece supeditarse a la opinión de los extraños.

La doctrina de los llamados "reconocimientos" ha sido aplicada, a partir de la Gran Guerra, particularmente a naciones de este continente, sin que en muy conocidos casos de cambios de régimen en países de Europa los gobiernos de las naciones hayan reconocido expresamente, por lo cual el sistema ha venido transformándose en una especialidad para las repúblicas latinoamericanas.

Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir, favorablemente o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia, el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o subsistir a sus gobiernos o autoridades. Naturalmente, en cuanto a las fórmulas habituales para acreditar y recibir agentes y canjear cartas autógrafas de jefes de Estado y cancillerías, continuará usando las mismas que hasta ahora, aceptando por el derecho internacional y el derecho diplomático.”